CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DEL COMITE CONTRA LA TORTURA

Saludos de
Patricia Horn
de ECAT

México

El Comité examinó en informe periódico de México (CAT/c/34/add.2) en sus sesiones 285a y 286a celebradas el 30 de abril de 1997 (Véase CAT/C/SR.285 y 286/Add.1) y adoptó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

1. México ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 23 de enero de 1986 y desde el año siguiente a su entrada en vigencia ha presentado oportunamente el informe inicial, así como los informes periódicos, previstos en el artículo 19.
2. El Comité aprecia la oportunidad con que el Estado parte ha cumplido con esta obligación, que contribuye a la ordenada ejecución de las funciones que le encomienda la Convención.
3. El tercer informe periódico, examinado en el décimo octavo periodo de sesiones, se adecua a las directivas generales sobre la forma y contenido de los informes periódicos, adoptadas por el Comité en 1991.
4. México presentó también, meses antes de su tercer informe, un informe complementario al segundo informe que le había requerido el Comité cuando examinara éste último, en noviembre de 1992. Sin embargo omitió el examen de ese informe complementario, tanto por la oportunidad en que fue presentado como por la circunstancia de estar la información que contiene incluida en el último informe.

B. Aspectos positivos

5. El Comité aprecia el esfuerzo del Estado parte por perfeccionar el estatuto legal de protección de las víctimas de tortura, especialmente las nuevas disposiciones sobre restitución, compensación y rehabilitación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, publicadas en enero de 1994, y la atribución de efecto obligatorio a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que impone a las autoridades la obligación de reparar el daño sufrido por las víctimas de tortura.

6. Reconoce el Comité la importancia del conjunto de iniciativas y actividades de educación y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a un ámbito muy amplio de actividades públicas en las que suelen ocurrir situaciones de violación de derechos humanos. El informe revela un esfuerzo ponderable dirigido al fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos tanto en los servidores públicos como en la sociedad nacional en general..

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación

7. La fragilidad de la cultura que propicia el respeto a las garantías individuales y la insuficiencia de la sensibilidad de las distintas autoridades acerca de la importancia de que la tortura sea castigada en forma severa y apegada al derecho, reconocidas en el informe con franqueza que el Comité aprecia, constituyen un factor subjetivo que, sin duda, hace más difícil la implementación efectiva del cumplimiento de las obligaciones que la Convención impone al Estado parte.

8. La restricción de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones, por expresa prescripción de la ley, son "no vinculatorias" y están privadas de carácter imperativo para la autoridad o servicios públicos a los cuales se dirijan, y su carencia de capacidad procesal para instar por el progreso de las investigaciones de las denuncias que formula, constituye una limitación que inhibe el cabal

cumplimiento del objeto esencial de proteger y promover los derechos humanos, para lo que fue creada. El Comité considera que la ampliación de sus facultades en el sentido indicado podría contribuir a la mejor observancia de la Convención por el Estado parte.

D. Motivos de preocupación

9. El Comité ha recibido abundante información fiable según la cual, no obstante las medidas legales y administrativas que ha adoptado el Gobierno para erradicarla durante el cuatrienio que cubre el informe que se ha examinado, la tortura ha continuado practicándose sistemáticamente en México, especialmente por las policías judiciales, tanto federales como locales y, en el último tiempo, por efectivos de las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. El Comité constata con preocupación la profunda dicotomía entre el abundante andamiaje jurídico y administrativo instalado para poner término a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la realidad que muestran esas informaciones.

10. La ineficacia de las iniciativas para poner término a las prácticas de tortura, a juicio del Comité es causada, entre otros factores, por la impunidad en que permanecen los torturadores, y por la persistencia de las autoridades encargadas de impartir justicia en admitir como medios probatorios en los juicios, las confecciones y declaraciones obtenidas mediante ella, no obstante las expresas disposiciones legales que declaran su inadmisibilidad.

11. En cuanto a la impunidad de los torturadores, el propio informe del Estado parte proporciona cifras que la hacen evidente; en efecto en el período comprendido entre junio de 1990 y mayo de 1996 sólo se han pronunciado dos sentencias condenatorias firmes fundadas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y cinco por homicidio causado por tortura, cifras que contrastan con la cantidad de quejas por torturas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, citadas en el mismo informe.

12. El incumplimiento por parte del órgano responsable de la investigación de los

crímenes del deber de investigar las denuncias de torturas, en forma pronta e imparcial como mandan los artículos 12 y 13 de la Convención, produce, en los hechos, la clausura del derecho de las víctimas a acceder a la justicia para la reparación de sus derechos violados.

E. Recomendaciones

13. Para desterrar la práctica de la tortura, el Comité considera necesaria la implementación de procedimientos efectivos de control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte de los servidores públicos, de los organismos responsables de la procuración de justicia y de la aplicación de la ley, en especial de la Procuraduría General de la República y sus dependencias y del Poder Judicial, para asegurar la observancia cabal de los abundantes remedios legales vigentes en México para la erradicación de la tortura y la sanción penal y administrativa de los infractores.

14. Además, el Comité considera necesarias las medidas siguientes:

a) Otorgar a las Comisiones Públicas de Derechos Humanos facultades jurídicas para ejercer la acción penal en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre las cuales deben incluirse las quejas de prácticas de tortura.

b) Intensificar los programas de formación y difusión destinados en especial a los servidores públicos de los organismos responsables de la procuración de justicia de hacer cumplir la ley, y del personal médico, e incluir en estos programas las cuestiones relativas a la prohibición de la tortura.

c) Diseñar procedimientos de información acerca de los derechos de los detenidos, los que deberán ser comunicados a estos inmediata y directamente por los agentes públicos en el acto de practicar su detención y exhibidos en todos los recintos de detención, en las oficinas del Ministerio Público y en la Sedes Judiciales. Esta información deberá contener, en términos claros y sencillos, las prescripciones de las normas legales pertinentes, en especial las de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política y las

correspondientes de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

15. El Comité recomienda al Estado Parte considerar la posibilidad de formular la declaración prevista en el artículos 21 y 22 de la Convención.

16. Respecto de las preguntas formuladas por los miembros del Comité durante el examen del informe , que no fueron respondidas, el Comité espera que lo sean por escrito a la mayor brevedad posible.

17. El Comité hace presente al Estado Parte la conveniencia de incluir en su próximo informe periódico, en los aspectos en que sea pertinente, información de carácter nacional, esto es del Distrito Federal y de los Estados. En especial el Comité desearía recibir información de este carácter sobre los siguientes aspectos:

a) Cifras sobre quejas por violaciones de derechos humanos, en general, y específicamente sobre tortura y recomendaciones emitidas, que incidan en los mismos aspectos, ante y por las Comisiones Públicas de Derechos Humanos.

b) Averiguaciones previas instruidas para investigar denuncias de tortura, casos en que se ha ejercido la acción penal y procesos en que se ha dictado sentencia firme, ya sean absolutorias o condenatorias y, respecto de la últimas, la extensión de las penas impuestas.

c) Casos en que se ha hecho efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores públicos imputados de tortura y sanciones impuestas.